

# Seguridad Humana y Medios de Vida Sostenibles en Centroamérica:



## El caso de las Maras

Jorge Nowalski Rowinski

Colección Prospectiva # 9

# Seguridad Humana y Medios de Vida Sostenibles en Centroamérica:

El caso de las Maras

Jorge Nowalski Rowinski

363      Nowalski Rowinski, Jorge.  
N946c      Seguridad Humana y Medios de Vida Sostenibles en Centroamérica:  
El caso de las Maras / Jorge Nowalski Rowinski -- 1a. ed. - - San José,  
Costa Rica: Lara Segura y Asociados Editores, 2005.  
36 p. ; 18 x 25 cm. (Serie: Colección Prospectiva, volumen N.o 9).

Auspiciado por el Centro Internacional para el Desarrollo Humano  
ISBN: 9968-930-09-1 (Volumen 9)

1. SEGURIDAD SOCIAL - ESTUDIOS - CENTROAMÉRICA.
2. SOCIOLOGÍA. I. Título.

## Presentación

En los últimos años, Centroamérica ha sido ampliamente investigada y cuestionada, en especial por las y los propios centroamericanos. Estos esfuerzos de análisis - junto con planteamientos gubernamentales- han conformado muchas agendas, que van desde el análisis de los problemas de desarrollo hasta múltiples propuestas para aprovechar las oportunidades de transformación estructural que se le presentan al istmo.

Sin embargo, estos esfuerzos, sintetizados en variedad de formas, no han generado aún el debate esperado, que contribuya realmente a resolver los problemas de desarrollo más álgidos. Más aún, parece existir una carencia de agentes catalizadores, con capacidad de formular e impulsar iniciativas claves, de generar pensamiento estratégico y de manejar la coyuntura en los diversos ámbitos; todos estos, pasos necesarios para enrumbar a Centroamérica hacia caminos de sostenibilidad.

Para aportar a estos retos y oportunidades, un grupo de intelectuales del campo de la política hemos conformado el Círculo de Copán, a fin de reflexionar y buscar nuevos caminos para la gobernabilidad y el desarrollo humano sostenible de la Región.

La agenda del Círculo de Copán es flexible y abierta. Su enfoque es multidisciplinario y pluralista. El Círculo aporta insumos para el debate democrático y la toma de decisiones políticas. Ofrece un estudio conjunto, elaboración de documentos de política y organiza deliberación en diferentes foros.

El CIDH, como Secretaría Ejecutiva del Círculo de Copán, desarrolla la colección Serie Prospectiva, que recoge las deliberaciones y los aportes del Círculo y de otros grupos de pensamiento estratégico. La publicación N.º 9 de esta serie, que se titula *Seguridad humana y medios de vida sostenibles en Centroamérica: el caso de las maras*, representa la primera entrega sobre un tema que cuestiona, en toda su extensión, la sostenibilidad del desarrollo humano de la Región. El caso de los jóvenes pandilleros, conocidos como mareros, reúne aspectos que tienen que ver con la exclusión, el desarraigo y la inseguridad en que viven miles de jóvenes en

Centroamérica. Son jóvenes víctimas y victimarios de la violencia, que además construyen una identidad negativa y disfuncional, a partir de la violencia misma.

El estudio aborda el tema de la vulnerabilidad de esos jóvenes y a partir de un análisis causal, recomienda lineamientos para asegurarles a los *mareros* un entorno seguro para su desarrollo integral e incorporación en la sociedad.

Con el objetivo de contribuir aún más al debate sobre el desarrollo humano y su sostenibilidad, el CIDH y el Círculo de Copán ponen a disposición de las fuerzas vivas de Centroamérica y del lector este documento.

**Mimi Prado**  
*Directora CIDH*

## Introducción<sup>1</sup>

La Centroamérica de hoy transita por los senderos de la paz y la democracia; tal vez una democracia todavía endeble y amenazada, no por los tambores de guerra, sino por los rezagos que presenta en su desarrollo, lo cual tiene a dos terceras partes de su población sumidas en la pobreza.

La Región cuenta con economías en transición, que apuestan a la apertura y la expansión del comercio, primordialmente, en el marco de una “competitividad espuria”, basada en bajos costos de mano de obra y la explotación de recursos naturales. En la realidad, la adopción de un modelo nuevo “aperturista” se ha acompañado de una mayor segmentación social y laboral que, lejos de ayudar a revertir las vulnerabilidades, las ha acrecentado, lo cual, a su vez, se ha traducido en mayores inseguridades para sectores importantes de la población del istmo.

Los jóvenes representan uno de los grupos más afectados, con la agravante de que muchos de ellos, ante la desilusión y la falta de esperanza, han optado por participar en pandillas que, a través de la violencia, buscan una identidad, un sentido de vida, un reconocimiento social. En el proceso, y por su comportamiento violento, alimentan un círculo vicioso que les genera mayor vulnerabilidad e inseguridad, lo cual, al final de cuentas, compromete su futuro, e inclusive sus vidas.

Este ensayo aborda el tema de la vulnerabilidad y la inseguridad y, basado en el caso de los jóvenes en riesgo y a partir del concepto de la seguridad humana, propone lineamientos para revertir rezagos, reducir vulnerabilidades y generar condiciones que permitan la presencia de medios de vida sostenibles, como preámbulo para asegurar la sostenibilidad del desarrollo humano de Centroamérica.

Para tal fin, el capítulo se divide en tres secciones. En la primera se caracteriza el modelo económico imperante que responde a la lógica de la globalización. De manera crítica se analizan los alcances del modelo con respecto a la calidad de vida de las

---

<sup>1</sup> El autor quiere dejar patente su agradecimiento a Caitlin Fouratt y a Mauricio Dierckxsens por su colaboración en la compilación de la información para este capítulo. Sin embargo, el autor es el único responsable de las ideas aquí expresadas.

grandes mayorías. Esa discusión se retoma en la segunda sección, donde se enfatiza el tema de las vulnerabilidades que enfrentan los jóvenes en riesgo y el entorno de inseguridad en que se desenvuelven. El caso de las maras sirve para poner en perspectiva el peligro que representan los grandes rezagos económicos y sociales que arrastra la Región y que comprometen la vida misma de miles de jóvenes.

En la tercera y última sección y a partir de la experiencia de las maras, se plantean líneas de acción para reducir los grandes rezagos que persisten en la Región y crear condiciones propicias para un entorno seguro que les permita acceder, en particular a los jóvenes en riesgo, a una calidad de vida digna. En esta sección se apela a la multidimensionalidad de la seguridad humana para ordenar las propuestas.

## I. Un entorno económico abierto y excluyente

A partir del fracaso del modelo de sustitución de importaciones,<sup>2</sup> los países del istmo han apostado a una mayor apertura económica para crear condiciones de sostenibilidad en su desarrollo; esto, en parte, condicionado por la magnitud y la complejidad de la recesión de principios de los años ochentas.

El proceso de apertura estuvo, en algunos casos, precedido por programas de estabilización macroeconómica y por programas de ajuste estructural; estos últimos, con un sesgo economicista. Para ilustrar dicha tendencia, basta revisar el tipo de medidas tomadas, las cuales, primordialmente, se centraron en recortes del gasto público para reducir los déficit públicos, y en medidas para contener la inflación y el mejoramiento de la recaudación fiscal; esto último, sin lograr revertir el carácter regresivo de los sistemas tributarios de los países de la Región. Se podría argumentar que durante los ochentas y los noventas, fueron pocas las acciones que se adoptaron para generar mayores ingresos por la vía de una mayor productividad y competitividad de las economías de los países del istmo.

Más aún, los procesos de ajuste no estuvieron acompañados de reformas en sectores clave para el desarrollo, como la salud, la educación y la seguridad social. Más bien, se contuvo el gasto social, lo cual limitó cualquier esfuerzo reformista.

Asimismo, a pesar del discurso político y la presión de organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la reforma del Estado ha sido incompleta e insuficiente, con una tendencia no articulada hacia una menor intervención estatal como inversor y prestatario, y un papel más subsidiario y regulador, aunque esto último todavía con grandes debilidades operativas y legales.

A finales de los noventas y en los primeros años del nuevo siglo, Centroamérica ha acelerado su proceso de apertura económica mediante la suscripción de tratados comerciales, la adopción de políticas e incentivos para atraer inversión extranjera, la

---

2 El modelo de sustitución de importaciones se propuso desarrollar el sector industrial centroamericano para reducir la dependencia del sector agroexportador. Para ello, se protegió al sector secundario interno por medio de aranceles a las importaciones y de un tipo de cambio fijo. El modelo pretendía desarrollar industrias infantiles con miras al Mercado Común Centroamericano como extensión del mercado local, y luego para la exportación a terceros mercados, pero generó un sesgo antiexportador, ya que las empresas se acostumbraron a depender del proteccionismo y de una moneda sobrevaluada. El mercado cautivo no fomentó la inversión en generación de productos que ocuparan una mayor tecnología y valor agregado; más bien se incentivó la formación de sectores basados en mano de obra barata y en un uso indiscriminado de los recursos naturales abundantes en la Región.

diversificación de la oferta exportable, y la desregulación de los mercados internos en parte, como resultado tanto de la desgravación arancelaria como de la venta de empresas de servicios estatales.

Como se verá más adelante y sin pretender llevar a cabo un análisis de causalidad, la apertura de la economía, aunque a nivel macro, muestra resultados importantes<sup>3</sup>, lo cierto es que en términos del desarrollo de los países de la Región no ha tenido tanto éxito. A manera de ejemplo, en los últimos años la vulnerabilidad y el empobrecimiento de las grandes mayorías de centroamericanos han ido en aumento, así como la segmentación social y laboral, lo cual confluente en mayor inseguridad y en la presencia de medios de vida insostenibles.

Para entender esos fenómenos, es necesario, primero, revisar la evolución de las economías de los países del istmo, para luego analizar aspectos cualitativos relacionados con el *performance* de dichas economías, lo cual servirá como preámbulo para profundizar sobre el tema de las vulnerabilidades y de la inseguridad.

## 1.1 Situación macroeconómica

A pesar de los programas de estabilización y de ajuste estructural y de las medidas que se han ejecutado para aumentar las exportaciones y atraer mayor inversión directa extranjera, las economías de los países del istmo han tenido un crecimiento errático e insuficiente para generar oportunidades económicas destinadas a un gran porcentaje de las poblaciones en cada país.

---

<sup>3</sup> El comercio intrarregional aumentó en un 80% de 1999 al 2002, con un valor de US\$3,088 millones y las exportaciones totales de la Región crecieron en promedio 14,1% en los últimos 7 años (Nowalski y Osterlof, 2004, pág. 35).

**Cuadro N° 1**  
**Centroamérica: Crecimiento económico promedio**  
**(en porcentajes)**

<b>Países</b>	<b>1985-90</b>	<b>1990-95</b>	<b>1995-99</b>	<b>1985-99</b>
Costa Rica	4,6	4,6	4,5	4,6
El Salvador	1,9	6,2	3,0	3,7
Guatemala	2,9	4,3	4,0	3,7
Honduras	3,1	3,5	2,4	3,1
Nicaragua	-3,3	1,5	5,2	0,8

Fuente: CMCA y FMI.

El cuadro 1 muestra un crecimiento promedio para el período 1985-1999, que oscila entre un máximo de 4,6% (caso de Costa Rica) hasta el 0,8% (caso de Nicaragua). A escala regional, el crecimiento promedio entre 1990 y el 2001 fue del 1,4% (CEPAL, 2002), todavía insuficiente para generar el número de empleos de calidad que requieren los países para disminuir de manera sustancial los niveles de pobreza que afectan a la mayoría de los habitantes de la Región. Más aún, en términos *per cápita*, se constata cómo durante el decenio de los noventa, el crecimiento económico fue aún más modesto, y en el caso particular de Nicaragua, y de Honduras, negativo y cero, respectivamente.

Como parte del esfuerzo por reducir los déficit gubernamentales, se han llevado a cabo procesos de reforma fiscal para mejorar la recaudación y eliminar exenciones y subsidios.

El esfuerzo se ha dirigido más al mercado interno, toda vez que la expansión comercial hacia terceros mercados les ha generado menores ingresos a los gobiernos (producto de la desgravación arancelaria).

**Cuadro N° 2**  
**Déficit y Deuda en Centroamérica**

<b>Países</b>	<b>Déficit fiscal como % del PIB (2001)</b>	<b>Deuda externa como % del PIB (2001)</b>	<b>Ingresos fiscales como % del PIB (2001)</b>
Costa Rica	2,7	19,8	13,1
El Salvador	3,5	22,9	11,9
Guatemala	1,9	13,6	9,7
Honduras	4,1	70,7	16,5
Nicaragua	16,5	250,6	21,5

Fuente: PNUD (2003), *Segundo Informe sobre el Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá*.

El cuadro 2 indica cómo los ingresos fiscales con respecto al producto interno bruto (PIB) son exiguos, lo cual refleja las dificultades que enfrentan los países del istmo para balancear los ingresos y gastos de sus gobiernos centrales y, en particular, para destinar recursos con el fin de ampliar la cobertura y el mejoramiento de la calidad de servicios básicos, los cuales tienen un impacto importante en el bienestar y la calidad de vida de las personas, entre ellos, los de salud y educación.

En los últimos años, la situación financiera de la gestión gubernamental ha sido deficitaria, alcanzando su porcentaje máximo en Nicaragua, con un 16,5% del PIB, y manteniéndose en los demás países por debajo del 4%; en los casos de Guatemala y Honduras, esto es producto de importantes reducciones en el nivel de gasto del gobierno, lo cual ha comprometido el desarrollo mismo de dichas sociedades.<sup>4</sup>

El endeudamiento externo, por su parte, muestra una evolución positiva con respecto a la situación imperante en los ochentas. Durante el pasado decenio, la deuda externa pasó del equivalente del 90% del PIB regional al 40%. Sin embargo, se presentan grandes diferencias entre los países; por ejemplo, para Costa Rica, El Salvador y Guatemala el endeudamiento externo pasó de un rango entre 30% y 60% en los ochentas a uno entre el 14% y el 23% (véase cuadro 2) en los noventas. La situación para Honduras, y en particular Nicaragua, sigue siendo comprometedor por lo que después del huracán Mitch en 1998, la comunidad internacional ha hecho esfuerzos por readecuar y condonar parcialmente la deuda de esos países (Nowalski, 2002).

4 Del 2001 al 2002 Guatemala tuvo una reducción del 7,4% y Honduras del 8,3% (Nowalski y Osterlof, 2004, pág. 20).

## 1.2 Crecimiento económico para beneficio de pocos...

No solo el crecimiento económico ha sido errático y modesto, sino que, también, ha beneficiado directamente a sectores muy pequeños en los diferentes países de la Región. El carácter “exclusivo” en parte obedece a la lógica del nuevo modelo de apertura económica, el cual se basa en la expansión del comercio, la inversión directa extranjera y el desarrollo competitivo de ciertos sectores productivos que no necesariamente son intensivos en mano de obra, por lo que su impacto es muy limitado. Para ilustrar esto último, basta recordar que la inmensa mayoría de las exportaciones de la Región se originan en el esquema de zonas francas, que menos del 5% de los insumos que usan son locales y que estas responden tan solo por el 10% del empleo (Nowalski, Ruiz y otros, 2003).<sup>5</sup>

Más aún, las economías de la Región presentan una desarticulación en actividades clave del aparato productivo, como son las de los sectores agropecuarios dirigidos al consumo interno y las de micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 98% del parque industrial de la Región. La falta de encadenamientos productivos, así como la poca relación que existe entre lo que se podría llamar el sector exportador son factores que, de una u otra forma, han incidido en la movilización de miles y miles de centroamericanos, en búsqueda de oportunidades económicas, hacia los Estados Unidos,<sup>6</sup> e inclusive a países receptores de la Región, como Costa Rica.

Sería incorrecto e injusto endosarle al nuevo modelo económico la responsabilidad total por el aumento en el número de centroamericanos que vive bajo el flagelo de la pobreza, pero, como se verá a continuación, el proceso de apertura económica, lejos de ayudar a cerrar las brechas económicas y sociales, ha contribuido a una mayor segmentación social y laboral en los países de la Región.

---

<sup>5</sup> Actualmente, más de la mitad de las exportaciones de tres países proviene de zonas francas.

<sup>6</sup> El número de migrantes de Centroamérica a los Estados Unidos pasó de 900.000 en 1979 a 11,5 millones en el 2001.

**Cuadro N° 3**  
**Distribución del ingreso y desigualdad económica (2002)**

	Coeficiente de Gini	Participación del ingreso final			Proporción del 10% más rico / 10% más pobre
		10% más pobre	20% más pobre	10% más rico	
Costa Rica	0,473	1,4	4,2	34,8	24,9
El Salvador	0,518	0,9	2,9	40,6	45,1
Guatemala	0,582	0,9	2,6	48,3	53,7
Honduras	0,564	0,9	2,7	42,2	46,9
Nicaragua	0,584	1,2	3,6	45,0	37,5

Fuente: PNUD. 2004. Human Development Report, 2003. Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, 2003.

Como lo confirman las estadísticas del cuadro 3, las desigualdades económicas de la Región son enormes. En países como Guatemala, El Salvador y Honduras, el 10% más rico tiene una participación del ingreso 50 veces mayor al 10% más pobre. Estas diferencias adquieren una dimensión mayor cuando se constata (cuadro 4) que más de la mitad de los centroamericanos vive en condiciones de pobreza y que inclusive, en Honduras 7 de cada 10 personas sufren ese fenómeno. Adicionalmente, en términos de los hogares, los datos muestran que en el año 2000, más del 60% no contaban con ingresos para satisfacer sus necesidades básicas (con excepción de Costa Rica).

**Cuadro N° 4**  
**Pobreza en Centroamérica (2000)**

	IDH	Población debajo de la línea de pobreza	Hogares pobres con jefa de hogar	Hogares con necesidades básicas insatisfechas
Costa Rica	42	22,9	31,4	30,2
El Salvador	105	45,5	29	n.d.
Guatemala	119	56,2	56,2	60,1
Honduras	115	71,6	71,6	64,9
Nicaragua	121	45,8	45,8	72,6

Fuente: PNUD. 2004. Human Development Report, 2003. Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, 2003.

El proceso de empobrecimiento y de concentración de la riqueza ha ido de la mano de una mayor precariedad laboral. El crecimiento económico, como se vio, ha sido errático e insuficiente para generar empleos de calidad para la mayoría de la población económicamente activa de la Región. Esto se debe, en parte, a la falta de encadenamientos productivos con el sector exportador, así como a la explosión demográfica de los ochentas y los noventas, que se traduce en un aumento importante de la fuerza de trabajo. Lo anterior, ligado a estructuras productivas con predominio de las MiPYME, ha contribuido al incremento de la desocupación y la informalidad.

**Cuadro N° 5**  
**PEA, Empleo y Seguridad Social, 2002**

	PEA (miles)	Tasa de desempleo		Tasa de Informalidad	Tasa de cobertura del Seguro Social
		Total	Jóvenes		
Costa Rica	1,757	6,8	16,4	32,8	76,9
El Salvador	2,572	7,0	13,2	42,8	30,1
Guatemala	5,065	6,0	11,1	41,0	17,8
Honduras	2,446	6,0	9,3	38,8	n.d.
Nicaragua	2,505	12,5	21,5	40,4	n.d.

Fuentes: PEA, desempleo y cobertura del SS: OIT, [www.oit.or.cr/estad](http://www.oit.or.cr/estad); Informalidad: PNUD, Segundo Informe sobre el Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, 2003.

Las estadísticas muestran tasas de desempleo relativamente bajas, pero eso se explica, en parte, por la segmentación laboral que existe, en donde 4 de cada 10 trabajadores pertenecen al sector informal, en razón de lo cual la tasa de desempleo abierto tan solo responde por una parte de la población económicamente activa (PEA) con problemas de empleo. A pesar de esa consideración, llama la atención el hecho de que, por lo general, el desempleo de los jóvenes es mucho mayor al promedio nacional en cada país del istmo. Más adelante se ahondará en el tema de los jóvenes y los desafíos que enfrentan en la Región.

En síntesis, desde el punto del desarrollo humano, preocupa el hecho de que la apertura económica no ha logrado revertir el proceso de precarización laboral, pues cada vez es mayor el número de centroamericanos que tan solo tiene acceso a trabajos con bajos ingresos, sin cobertura del seguro social (véase cuadro 5), con poca calificación laboral y sin posibilidades de desarrollo técnico. Este fenómeno, a su vez, se traduce en mayor pobreza y, consecuentemente, mayor vulnerabilidad.

### 1.3 Insostenibilidad del desarrollo

El hecho de que la mayoría de los centroamericanos no pueda gozar de una calidad de vida digna y que muchos de ellos tengan sus capacidades de supervivencia comprometidas, es indicativo de que el modelo económico adoptado no ha ido acompañado (o no ha permitido adoptar) de políticas y programas sociales que, además de asegurar la capacidad de supervivencia de millones de centroamericanos, les brinden mayores oportunidades económicas y sociales, y generen medios de vida sostenibles.

La inestabilidad económica, así como la lógica que ha imperado en la política económica en los últimos 20 años y que ha propiciado fuertes restricciones en el gasto social, en la inversión pública y en el mantenimiento de la infraestructura física productiva y social de carácter pública, le han dado un sesgo economicista a la acción gubernamental, pasando la política social a tener un carácter residual y focalizado.

**Cuadro N° 6**  
**Gasto Público Social (2000)**

	Per Cápita*	Como % del PIB		
		Total	Salud	Educación
Costa Rica	633	16,8	6,9	4,4
El Salvador	83	4,3	3,3	2,3
Guatemala	113	6,2	1,4	1,7
Honduras	58	7,4	2,7	4,0
Nicaragua	70	12,7	5,5	5,0

\* En dólares constantes de 1997

Fuente: CEPAL, base de datos de indicadores sociales, [www.eclac.cl/badeinso](http://www.eclac.cl/badeinso)

Como indica el cuadro 6, el gasto social per cápita es ínfimo, por lo que no deben sorprender los grandes rezagos que enfrentan los países de la Región para reducir vulnerabilidades y asegurar medios de vida sostenibles.

A continuación se revisan algunas estadísticas que reflejan grandes rezagos en la calidad de vida de los centroamericanos y que, consecuentemente, muestran cuán vulnerables son algunos grupos como el de los niños y los jóvenes, quienes, en números importantes, se enfrentan con un entorno lleno de inseguridades que comprometen la propia existencia humana.

En lo que a salud se refiere, la asignación de recursos por parte de los gobiernos es relativamente pequeña. Como se vio en el cuadro 6, Costa Rica es el país que más recursos invierte en salud (6,9% del PIB), mientras que países como Guatemala y Honduras asignan menos del equivalente de un 3% de sus PIB respectivos. Por lo tanto, no es de sorprenderse, al comparar el estado de la salud, que los países que menos invierten, son, paradójicamente, los que más necesitarían invertir.

**Cuadro N° 7**  
**Estado de la Salud en Centroamérica**

	<b>Tasa de mortalidad de menores de 5 años (2001), (por 1.000 nacidos vivos)</b>	<b>Población sin acceso a fuentes de agua mejorada (2000)</b>	<b>Niños menores de 5 años con peso insuficiente (2000)</b>	<b>Población por debajo del mínimo energético alimentario (1999-2001)</b>
Costa Rica	11	2	5	6
El Salvador	39	26	11,8	14
Guatemala	58	n.d.	24,2	25
Honduras	38	10	25	20
Nicaragua	43	21	9,6	29

Fuente: PNUD. Segundo Informe sobre el Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá; World Bank, Development Indicators, 2003

El cuadro 7 indica como, con la excepción de Costa Rica, las tasas de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 niños nacidos vivos es todavía alta, lo cual refleja problemas de acceso y de cobertura de servicios básicos, de infraestructura y de personal y equipo. La misma condición de pobreza que presentan los países del istmo es consecuente con los problemas de desnutrición que existen, por ejemplo, en Guatemala y en Honduras, en donde 1 de cada 4 niños menores de 5 años no cuenta con un peso considerado normal y no consume el mínimo de energía alimentaria requerida para su desarrollo.

Otro aspecto que incide en la calidad de la salud es el acceso al agua potable; el cuadro 7 muestra cómo casi 3 de cada 10 habitantes de El Salvador y 2 de cada 10 de Nicaragua no tienen acceso a fuentes de agua potable.

**Cuadro N° 8**  
**Indicadores de Salud Reproductiva (2002)**

	Alumbramientos mujeres de 15 a 19 años		Uso de anticonceptivos
	Tasa (/1000)	Proporción del total	
Costa Rica	78	13,2	85
El Salvador	87	n.d.	51
Guatemala	111	15,5	31
Honduras	103	18,3	41
Nicaragua	135	n.d.	57

Fuentes: Proporción de nacimientos: CEPAL (2005) Panorama Social 2004.  
Resto: CEPAL (2003) Estado de la Población Mundial, 2003.

Otro problema de salud ligado al tema de mortalidad infantil tiene relación con la maternidad a temprana edad. Como lo muestra el cuadro 8, el porcentaje de alumbramientos por parte de adolescentes es muy alto, sobre todo en Nicaragua, Guatemala y Honduras, en donde más del 10% de los nacimientos son de madres entre 15 y 19 años. Sin entrar en una discusión de causa, la prominencia de madres solteras en esos países se explica, en parte, por la falta de educación en salud reproductiva y el poco uso (y acceso) de métodos anticonceptivos (véase cuadro 8). No es de extrañar que justamente en esos países la mortalidad infantil es cuatro veces mayor que en Costa Rica que tiene mejores servicios de salud, el 85% de sus jóvenes usa anticonceptivos y tiene una cobertura del seguro social de casi el 80% de la PEA (véase cuadro 5).

**Cuadro N° 9**  
**Prevalencia de VIH/SIDA en Centroamérica (2001)**

	<b>Jóvenes (15-24 años) con VIH/SIDA</b>		<b>Tasa de VIH en Adultos</b>
	<b>Casos</b>	<b>% del total de jóvenes</b>	
Costa Rica	4.600	1,2	0,6
El Salvador	10.200	1,5	0,6
Guatemala	29.000	2,3	1,0
Honduras	22.000	3,2	1,6
Nicaragua	2.270	0,4	0,2

Fuente: UNICEF (2002), Los jóvenes y el VIH/SIDA: una oportunidad en un momento crucial.

Los jóvenes también representan el grupo etario con mayor incidencia del VIH/SIDA. El cuadro 9 señala cómo el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años en el año 2001 duplicaba el porcentaje de adultos. Honduras y Guatemala son los países en donde el problema es más agudo. De nuevo, las carencias de un buen programa de salud reproductiva y la poca prevalencia de anticonceptivos son factores que no ayudan a evitar que más y más jóvenes se contagien con VIH/SIDA, con los conocidos efectos nefastos que ello encierra para la misma existencia de los jóvenes y la sociedad en general.

La presunción sobre educación es que esta representa, tal vez, el instrumento de movilidad social más importante. La educación es una inversión que facilita el desarrollo cognitivo y analítico de las personas, les permite desarrollar sus capacidades, y en el proceso, contribuye al *empoderamiento* que transforma a las personas en sujeto de su propio desarrollo. Por lo tanto, el impacto de los rezagos que se presentan en el campo de la educación supera, con creces, cualquier estadística que se utilice al respecto. Teniendo eso en mente y dejando para la sección sobre las maras el análisis del impacto de la exclusión del sistema educativo, a continuación se presentan algunos datos que muestran importantes rezagos que comprometen el futuro mismo de los países del istmo.

**Cuadro N° 10**  
**Indicadores de la Educación en Centroamérica**

	Analfabe- tismo en adultos 2001	Escolaridad Neta			Tasa de deserción en jóvenes (15-19 años) (2000-2001)
		Preescolar (2001-2002)	Primaria (2000-2001)	Secundaria (2000-2001)	
Costa Rica	4,3	67	91	49	34
El Salvador	20,8	41	81	39	39
Guatemala	30,8	41	84	26	59
Honduras	24,4	21	88	n.d.	n.d.
Nicaragua	43,2	26	81	36	41

Fuentes: Elaboración propia, con base en información de Global Education Digest, UNESCO, PNUD (2003) y CEPAL (2003).

Un primer aspecto por considerar es el analfabetismo en adultos que, además de ser indicativo de los problemas laborales que enfrentan las personas sin educación o con bajos niveles, tiene un impacto intergeneracional. De acuerdo con un estudio reciente (CEPAL, 2004), el nivel educativo de los padres es un factor que impacta los logros educativos de los hijos. Los resultados muestran que solo el 20% de los jóvenes cuyos padres no terminaron primaria, logran al menos terminar dicho ciclo, en contraposición con el 60% de los hijos de padres con al menos diez años de estudio. Tomando en cuenta esa relación, con la excepción de Costa Rica, en los países de la Región prevalecen altos porcentajes de adultos sin ningún tipo de instrucción, destinados, por lo tanto, a afrontar problemas de precariedad laboral y pobreza. Nicaragua y Guatemala presentaron, en el año 2001, un analfabetismo que afectó a 4 y 3 de cada 10 adultos, respectivamente.

Al otro extremo de la composición etaria, se presenta un rezago con consecuencias muy graves. Partiendo del hecho de que la educación preescolar es fundamental para el estímulo psicosocial, el desarrollo de la inteligencia y el comportamiento social de los niños, los datos del cuadro 10 muestran cómo al menos el 60% de los niños menores de 7 años no asistieron en el 2001 y 2002 a centro educativo alguno. Llama la atención como la Región presentó para principios de la década una escolaridad neta del 87,5% para primaria, cifra que desciende dramáticamente al considerar el ciclo de secundaria. Las altas tasas de deserción de los jóvenes (entre 15 y 19 años) com-

prometen, aún más, las posibilidades para los jóvenes de gozar de un trabajo decente y una calidad de vida digna. Algunos factores, entre ellos, la falta de recursos económicos de la mayoría de los hogares de la región, el bajo nivel educativo de los padres y, sobre todo, la madre, así como la maternidad entre adolescentes, responden, en gran parte, por la alta deserción.

Recapitulando, en esta sección se ha visto cómo el modelo económico adoptado desde mediados de los años ochentas en Centroamérica, si bien ha propiciado una mayor apertura económica y el comercio intrarregional y con terceros mercados se ha expandido en forma acelerada, lo cierto es que esas tendencias han ido acompañadas de mayor exclusión económica y social, como lo muestran una batería de indicadores en sectores básicos que evidencian grandes rezagos y que constatan el hecho de que dos terceras partes de los habitantes de la Región viven bajo el flagelo de la pobreza.

En la siguiente sección, se profundizará más sobre los problemas de desarrollo al estudiar el caso de las pandillas juveniles conocidas como maras. En particular, se hará alusión a las condiciones que enfrentan esos jóvenes y que cada vez los marginan, hasta cierto punto, de poder ejercer una ciudadanía activa y responsable.

## II. Vulnerabilidad e inseguridad: El caso de las Maras<sup>7</sup>

La escogencia del caso de las pandillas juveniles responde a su carácter dual como víctimas de la inseguridad y causantes de inseguridad en el istmo. Esta sección no pretende realizar un estudio sobre criminalidad; más bien, trata de comprender mejor las razones que generan la aparición y el desarrollo de las maras, como ejemplo inequívoco de las consecuencias graves que pueden generar la exclusión económica y social y la pérdida de identidad en procesos migratorios forzados por la misma situación de los países del istmo, que, lejos de generar oportunidades para sus habitantes, crean condiciones que obligan a muchos de sus ciudadanos a cruzar las fronteras en procura de un mejor porvenir.

La seriedad del fenómeno migratorio es tal que más de dos millones de centroamericanos viven y trabajan en los Estados Unidos; además, son cada vez más las personas que dependen de las remesas que envían sus parientes o allegados para sobrevivir. De los \$32.000 millones de remesas que se dirigieron a Latinoamérica en el año 2002, \$5.500 millones tuvieron destino final en Centroamérica, beneficiando así a 1,3 millones de personas en El Salvador, 1,5 millones en Guatemala y 600.000 en Honduras (BID, 2003).

Al margen del impacto económico que tienen esas remesas, los flujos migratorios van acompañados de *externalidades* que abarcan fenómenos como desintegración familiar, reducción del capital social, pérdida de mano de obra y desarraigo. El análisis del impacto de la migración escapa de los objetivos de este ensayo, por lo que el tema se aborda para entender los orígenes de las pandillas juveniles conocidas como maras.

Las maras no tienen su origen en Centroamérica. Es en los años sesentas y sobre todo en los setentas que en las zonas central-sur y este de Los Ángeles, con el cierre de industrias y el consecuente desempleo, así como el empobrecimiento de un sector importante de la población y el deterioro de la calidad y la reducción en la cobertura de servicios básicos, las calles se empezaron a llenar de jóvenes desempleados que consumían drogas, quienes empezaron a organizarse en pandillas (*La Prensa Libre*, 7-2-02). La primera que se formó fue “La 18”, compuesta por jóvenes latinos y afroamericanos y liderada por chicanos.

---

<sup>7</sup> La palabra *mara* es el diminutivo de la palabra “marabunta” que es el nombre de una hormiga salvaje que se propaga como plaga y es capaz de destruir todo lo que se le atraviese en su camino.

Años después y como respuesta a la mara 18, los hijos de salvadoreños migrantes y migrantes jóvenes forman la llamada “mara salvatrucha” (MS). La salvatrucha da fuertes peleas callejeras con el fin de demarcar territorios y generar, en el proceso, una identidad etnocultural consignada territorialmente.

Presas de un cúmulo de frustraciones y privaciones económicas y sociales y en busca de una identidad propia, las maras, sin dejar su presencia en los Estados Unidos, se trasladan a la Región y se propagan, por razones que luego serán analizadas. En la actualidad, hay una fuerte presencia de la salvatrucha y la M18.

No existen cifras oficiales sobre el número de maras que están presentes en el istmo. En el caso de Honduras, la Unidad de Prevención de Pandillas de la Policía Nacional (*La Prensa*, Honduras, 31-10-2000) estimó el número de mareros en 60.000, distribuidos en 475 pandillas para el año 2000. La gran mayoría eran hombres (3/4 partes), con edades entre 16 y 21 años. Para El Salvador, se estima la presencia de 30.000 mareros, los cuales son jóvenes, donde el 83% proviene de familias pobres (IUDOP, 2001). Para Guatemala no hay un estimado del número de maras, pero diferentes encuestas y estudios de grupo señalan características similares, en el sentido de que 3 de cada 4 mareros son menores de 18 años (IUDOP, 2001).

Para una mejor comprensión del fenómeno y previo a discutir algunas de sus causas, es necesario conocer algo sobre el perfil de los mareros y las privaciones que enfrentan, lo cual muestra su vulnerabilidad y el entorno inseguro en donde se mueven, al que “contribuyen”, por cierto, por su comportamiento violento.

Para efectos del perfil, no se hará un análisis detallado sobre las características de mareros por país; más bien, se les dará un tratamiento más general que sea indicativo de cuán vulnerables son los jóvenes que participan en las maras. Como se mencionó antes, un primer rasgo tiene que ver con el hecho de que es un fenómeno que, por el momento, se da entre los jóvenes. Casi todos los mareros provienen de familias pobres; 7 de cada 10 miembros de las maras vienen de hogares donde la madre es la jefa del hogar (IUDOP, 2001).

En términos educativos, 8 de cada 10 mareros no estudian, y el promedio de escolaridad es de tan solo 4 años (IUDOP, 2001). En cuanto al empleo, diferentes estudios muestran que los mareros, por lo general, están desempleados o tienen trabajos temporales y muchos de ellos, informales y hasta “ilegales”, como el tráfico de drogas, además de recurrir a la delincuencia para sobrevivir (Concha A., Santacruz M., 2001; IUDOP, 2001). Adicionalmente, el 25% de jóvenes menores de 18 años consume algún tipo de droga (FESPAD, 2003). El 80% de los miembros de las maras fue víctima de

violencia doméstica; el 70% ha sufrido el asesinato de algún familiar o conocido. En cuanto a la paternidad, 40% de los hombres mareros tienen hijos, en contraposición con el 30% de las mujeres mareras (Solidaridad, 1998).

Los datos anteriores muestran cuán vulnerables son esos jóvenes, pero no explica el por qué recurren a la violencia a través de las pandillas juveniles. Tal vez una pregunta más básica, antes de abordar el tema de la violencia, tiene que ver con los objetivos que buscan los jóvenes con la participación en las maras.

Un primer aspecto por subrayar tiene relación con los orígenes mismos de las maras. Un grupo grande, al repatriarse o ser deportado, regresó a los países del istmo frustrado por la falta de oportunidades económicas y sociales que enfrentaron en los Estados Unidos (además del desarraigo). Dichas personas encuentran en la Región países con rezagos importantes, en donde las opciones son todavía más limitadas y con fuertes sentimientos de “no pertenencia”, en parte, producto de un proceso de transculturación del cual fueron “víctimas” durante sus años en el vecino país del norte.

Estos primeros grupos encuentran, además, pares que afrontan riesgos sociales y privaciones y que, por lo tanto, eran también vulnerables y se desenvolvían en entornos inseguros. A manera de ejemplo, muchos de los jóvenes que deciden participar con las maras vienen de hogares desintegrados, de familias desestructuradas y disfuncionales. Como se vio antes, el 70% de las maras proviene de hogares uniparentales. Esa disfuncionalidad familiar se agrava por la presencia del flagelo de la pobreza, lo cual va acompañado de importantes carencias, padres ausentes que trabajan en la informalidad o en trabajos con malos salarios, sin protección social, viviendo en espacios físicos precarios, hacinados y sin acceso a la recreación. La misma situación familiar limita las oportunidades de estudio de los jóvenes, quienes, a temprana edad y sin la formación o madurez debida, se deben incorporar al mercado laboral, lo cual, de por sí, los pone en situación desventajosa. Todos estos aspectos muestran el resquebrajamiento de la familia como agente socializador.

Los problemas familiares no se limitan al ámbito de la pobreza y las carencias pues en el caso de los mareros, estos experimentaron violencia doméstica. Los castigos físicos recibidos y el ser testigos y hasta copartícipes de comportamientos violentos en el seno familiar, les mancilló su autoestima y los llenó de desilusión y hasta de odio; todo lo anterior no ayudó a desarrollar un sentido de pertenencia. En un estudio llevado a cabo en El Salvador, 7 de cada 10 jóvenes mareros entrevistados no lograron identificar modelos positivos tanto al interior de la familia o de la comunidad, durante su infancia y juventud (Smutt, 1998).

Además de la familia, el sistema de educación formal representa un agente socializador relevante, sumado a la importancia que tiene la educación en cuanto a la adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades analíticas y de interacción social. El proceso de construcción de una identidad, así como el sentido de pertenencia a un grupo y a una comunidad son *externalidades* positivas que se generan desde los centros educativos. El abandono de los estudios lleva a muchos jóvenes en busca de esas necesidades de **ser** y **pertenecer** en la calle y, en particular, en el seno de las pandillas juveniles.

Otro aspecto que también explica la escogencia de las pandillas como “alternativa de vida” tiene que ver con el mercado de trabajo. El abandono prematuro de la educación, así como el entorno de inseguridad que abriga a muchos de los jóvenes centroamericanos, en el mejor de los casos, lleva a un grupo de jóvenes a participar en el mercado informal o a acceder a empleos no calificados, con pocas o nulas oportunidades de capacitación y promoción. El trabajo es importante, no solo como fuente de ingresos, sino, también, para la formación de una identidad ocupacional, para la interacción social y como fuente de creatividad; por lo tanto, la no participación de los jóvenes en los mercados de trabajo también constituye un elemento que podría contribuir a la expansión de las pandillas juveniles. Esto no quiere decir que los jóvenes apuesten a las maras en busca de los atributos antes citados, pero sí que la exclusión laboral constituye otro factor que lleva a jóvenes a las calles, con lo cual muchos de ellos terminan por engrosar las filas de las pandillas juveniles.

Ahora bien, ¿qué pretenden obtener los jóvenes con su afiliación a las maras? Basta recordar cuán vulnerables son los jóvenes con características similares a las referidas en el perfil de los mareros, para darse cuenta de las necesidades de pertenencia, identidad, autoestima y reconocimiento social que tienen. Por eso, no es de extrañarse que sea a través de las maras como muchos jóvenes tratan de satisfacer esas necesidades que, por medio de la familia, la escuela/colegio, el trabajo y la comunidad no logran obtener.

Más aún, el desamparo que muchos de los jóvenes enfrentan por el abandono de alguno de los padres o por la persistencia de un ambiente de violencia en el seno familiar, lleva a los jóvenes al convencimiento de que tienen que velar por sí mismos y toman, por lo tanto, la decisión de dejar las familias y transformar **la calle** en su nuevo grupo social de referencia. Sin embargo, en el proceso de distanciamiento familiar, los jóvenes adquieren una actitud agresiva que luego se transforma en violencia, comportamiento que se legitima en las maras.

Para los jóvenes, las maras les brindan la oportunidad de ser diferentes de los demás, realizar lo irrealizable; en otras palabras, las maras constituyen un modo heroico y distinto de vivir la vida (IUDOP, 2001). También les da un espacio propio, respeto y solidaridad. La pandilla les da una sensación de libertad, algo que no siempre sintieron en sus hogares.

En síntesis, las maras cumplen funciones como proporcionar recursos y espacios para que los jóvenes satisfagan carencias afectivas que tienen los mareros en el seno familiar y la comunidad; brinda un espacio para el intercambio de experiencias, en donde se encuentra apoyo para los problemas cotidianos. La pandilla también ofrece la oportunidad de desarrollar una identidad, sentirse parte de, ser aceptado y reconocido socialmente (Smutt, 1998). El uso de tatuajes y ropa de color oscuro solo refuerza esa necesidad de diferenciarse y retar lo establecido. Esa visibilidad va acompañada de conductas que rayan con lo establecido y que se caracterizan por una alta dosis de violencia y agresividad.

Es difícil precisar las razones que responden por la violencia que envuelve la vida y la conducta de los mareros. Algunas de las causas ya fueron discutidas y tienen un carácter estructural, tanto sectorial como institucionalmente. Muchas de ellas están ligadas a las carencias, privaciones y falta de oportunidades económicas y sociales que enfrentan los jóvenes; otras se refieren al debilitamiento de instituciones que actúan como agentes socializadores. Sin embargo, sin pretender un análisis exhaustivo sobre la violencia, hace falta referirse a la subcultura de violencia, presente en la Centroamérica contemporánea.

Los jóvenes mareros crecieron y se desarrollaron en un ambiente violento, desde la presencia de violencia doméstica hasta circunstancias violentas en los ámbitos político, económico, social y personal. Los conflictos armados, la falta de oportunidades laborales, la pobreza, la desintegración y la violencia familiar, así como diferentes formas de exclusión, los han expuesto a situaciones violentas que en el proceso los han hecho más vulnerables (Smutt, 1998). Adicionalmente, los jóvenes han crecido bajo sistemas democráticos endebles, con fuerte presencia policial/represiva, y con esquemas de poder verticales, en donde los espacios de participación son mínimos y prácticamente nulos para los jóvenes.

Se podría argumentar que el verse inmerso en un ambiente inseguro y violento les da a los jóvenes un marco valorativo que acepta la violencia como una forma de vida, de convivencia (IUDOP, 2001). La agresividad genera estatus, poder y, como se mencionó antes, les da reconocimiento social en el seno de la mara. Al exterior de la mara y producto de su conducta, los mareros “promueven” valores de violencia, abuso

e irrespeto por los derechos de otros, lo cual contrasta con los valores de lealtad y solidaridad presentes dentro de la pandilla.

Los jóvenes no nacen violentos, adquieren conductas agresivas por desarrollarse e interactuar en contextos violentos (Smutt, 1998). Estos contextos incluyen patrones de violencia aprendidos desde el hogar y la calle, hasta patrones producto de una subcultura de violencia que ha estado presente en los últimos decenios en la Región. Los jóvenes procesan esos patrones y aportan su cuota de violencia hacia ellos mismos, mediante conductas agresivas y destructivas, como la drogadicción y el alcoholismo, hacia el interior de la mara mediante la fijación de reglas y códigos de conducta violentos y hacia el exterior de la mara mediante agresiones y ataques físicos a otras pandillas, a la autoridad y a veces contra la población en general.

El accionar violento de los mareros sirve para construir un estereotipo negativo que, en lugar de incidir en un cambio de conducta, refuerza el comportamiento agresivo de las maras. En un estudio sobre maras, se les preguntó a 15 estudiantes universitarios en Guatemala sobre el significado de las maras. Las respuestas se pueden sintetizar mediante la definición de las maras como grupos **antisociales** y **rebeldes** que generalmente provienen de hogares desintegrados, incapaces de ofrecerles amor y valores morales, en los que incluso se les han violado sus derechos desde la niñez (IUDOP, 2001, pags. 118-119).

A pesar de la imagen de la mara como grupo antisocial, las respuestas de los jóvenes reconocen cuán vulnerables son los jóvenes y algunas de las causas por las que ellos deciden afiliarse a las maras. Sin embargo, el sentir de la opinión pública, tal vez exacerbada por el papel de los medios de comunicación, es de que por la presencia de las maras, la ciudadanía vive en inseguridad y enfrenta grandes peligros debido a la violencia de los mareros.

A manera de ejemplo, de acuerdo con el Dr. Fabio Molina, del Departamento de Estadísticas de Medicina Legal (Villarreal, N., 2005) la mayoría de los crímenes en El Salvador son por delincuencia común y no por las maras. Según su departamento, solo el 15% de los homicidios registrados tiene que ver con las maras, lo cual no deja de ser impactante al tener El Salvador una tasa de 31,5 homicidios por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2004).

Para recapitular, las personas que participan en las maras son jóvenes vulnerables que no han gozado de oportunidades económicas y sociales, provenientes de hogares disfuncionales, inmersos en ambientes de violencia e inseguridad y con una autoestima muy débil, sin reconocimiento familiar ni social, y muchos de ellos, desarraigados.

Los problemas estructurales que enfrentan los países de la Región y el flagelo de la pobreza han tenido un fuerte impacto en la calidad de vida de miles de centroamericanos jóvenes quienes, ante la vulnerabilidad resultante y el entorno de inseguridad que los envuelve, han optado, paradójicamente, por engrosar las filas de pandillas que, lejos de revertir esas vulnerabilidades, las aumentan y contribuyen a una mayor inseguridad.

### III. Hacia un entorno seguro con oportunidades

La expansión de las pandillas juveniles en la Región, así como su comportamiento violento y su visibilización a través de vestimenta, tatuajes y formas agresivas de interacción, han generado un rechazo casi general en las diferentes sociedades centroamericanas. De acuerdo con la encuesta del Latinobarómetro, ocho de cada diez salvadoreños piden guerra abierta contra la delincuencia, la cual ligan en gran parte a los mareros. La encuesta también muestra el parecer de la gente en Honduras, Guatemala y El Salvador, de que las maras se han convertido en una amenaza real y seria para la seguridad personal y nacional (*El Diario de Hoy*, El Salvador, 23-8-04).

Esa percepción de las maras como una amenaza a la seguridad también la expresan personas ajenas a la Región. Por ejemplo, el agente del FBI Charles Stephen De France, director de la nueva fuerza nacional antipandillas de los Estados Unidos -creada en diciembre del 2004-, en una entrevista periodística dijo que la lucha contra la Mara Salvatrucha (MS) es tal vez la prioridad más alta en la sección de investigación criminal del FBI. Esto, porque, de acuerdo con De France, ha habido tanto un incremento dramático en el número de asesinatos y actos violentos perpetrados por la MS como por su expansión al tener presencia en 33 de los estados del vecino país del norte (*La Prensa Gráfica*, El Salvador, 03-5-05).

Ese sentir contra las maras ha dado pie a respuestas institucionales, sobre todo represivas, acompañadas, en el caso de El Salvador, de la promulgación de una ley antimara (en octubre del año 2003) y de un plan policial conocido como “mano dura”. La actitud del Gobierno salvadoreño hace eco del sentir de gran parte de la población. Para ilustrar ello, en un estudio llevado a cabo en ese país, el 81,8% de las personas entrevistadas opinó que los mareros deben ser castigados con todo el peso de la ley; 72,5% se mostró de acuerdo con el plan mano dura y el 52,9% consideró que solo usando la fuerza contra las maras iba a disminuir la delincuencia juvenil (FESPAD, 2003).

Existen otras formas de lidiar con el problema de las maras; programas como “La mano amiga” en el mismo El Salvador y Homies Unidos buscan la rehabilitación del pandillero. Sin embargo, es difícil saber a ciencia cierta cuál ha sido su impacto para reducir las vulnerabilidades de los mareros y brindarles un entorno seguro para su reinserción en la sociedad.

Por lo tanto, por falta de estadísticas confiables y con el objeto de contribuir al debate de cómo combatir, desde una perspectiva de desarrollo, el fenómeno de las maras, se plantean líneas de acción que permitirían solventar algunos de los riesgos que

enfrentan los jóvenes y brindarles oportunidades para su desarrollo integral y su participación como sujeto del quehacer nacional.

Antes de proceder con la discusión de posibles líneas de acción y con el fin de facilitar la lectura de las propuestas, se introduce el concepto de seguridad humana como marco de referencia. La seguridad humana, de acuerdo con la Comisión sobre Seguridad Humana de las Naciones Unidas (Comisión sobre Seguridad Humana, 2003), es el marco, el entorno organizacional y funcional que les permite a los individuos desarrollarse, crecer, vivir con calidad, procrear y alcanzar sus metas. Es el escenario que posibilita el ejercicio pleno de la libertad con responsabilidad social y en el cual las personas pueden tener un papel protagónico en el proceso de desarrollo de sus comunidades y la sociedad en general.

La seguridad humana es un concepto multidimensional y holístico. Algunas de las dimensiones que abarca son la económica, la social, la política, la ambiental, la cultural, la física y la normativa. La **seguridad económica** implica un desarrollo económico incluyente y equitativo, con cadenas de valor que requieren de una subcultura de empresarismo y del fortalecimiento y modernización de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. La seguridad económica implica el mejoramiento de la empleabilidad de las personas, lo cual, a su vez, es el resultante del desarrollo de capacidades, destrezas, la adquisición de conocimientos, así como la habilidad de interactuar.

La **seguridad social** es el entorno que incluye el acceso a servicios básicos y de calidad, en áreas como la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, además de implicar la satisfacción de las necesidades básicas. La seguridad social incorpora una noción de comunidad amplia que reconoce y aborda un conjunto de problemas y sus interconexiones, como violaciones a los derechos humanos, alerta temprana sobre posibles conflictos, enfermedades infecciosas, migraciones, violencia social y pobreza.

La **seguridad política** subraya la importancia del *empoderamiento* de grupos clave, como los jóvenes, y el fortalecimiento de los gobiernos locales y la sociedad civil, como condiciones para el fortalecimiento de la democracia a través del ejercicio de una ciudadanía activa y socialmente responsable.

La **seguridad ambiental** tiene relación con la sostenibilidad del desarrollo local y nacional, e implícitamente, con el buen manejo de los recursos naturales. La **seguridad cultural** se refiere al acceso a la educación y la capacitación formal y continua, así como a la transmisión de valores y conductas, como la transparencia, la tolerancia y el respeto a la diversidad etnocultural.

La **seguridad física** gira en torno al ejercicio de las responsabilidades del Estado en el uso de la fuerza para proteger y salvaguardar la vida de las personas de cualquier amenaza endógena o exógena, que ponga en peligro la integridad física, patrimonial y cultural de las personas y la sociedad en general.

Otra dimensión importante es la **jurídica**. La seguridad se basa en un sistema de reglas claras, estables, aplicables y funcionales a las necesidades y aspiraciones de las comunidades y las personas. Más aún, implica la existencia de premios y castigos para asegurar el respeto a las libertades individuales y comunitarias.

La definición de algunas de las dimensiones del concepto de seguridad humana deja entrever los objetivos que deben perseguir las políticas y acciones que se implementen para obtener un entorno seguro para las personas. Por la naturaleza de estas, se podría argumentar que muchas de esas acciones, a la vez, tienen el doble propósito de generar condiciones que les permitan a las personas gozar de oportunidades y desarrollar sus capacidades, sin comprometer las de las generaciones futuras. La discusión de esas acciones supera los objetivos de este ensayo, en virtud de lo cual las propuestas que se presentan retoman el tema de los jóvenes en riesgo y, en función de ellos, se plantean algunos lineamientos de política orientados a brindarles un entorno seguro, la reducción de sus vulnerabilidades y la obtención de medios de vida sostenibles.

Un primer conjunto de acciones procuran asegurar la capacidad de supervivencia de las personas. Desde esa lógica, los gobiernos del istmo deberán asignar más recursos para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios básicos de atención pre y neonatal. Esos servicios deben abarcar la atención de las madres y asegurar, a través de sistemas preventivos, descentralizados, la nutrición y el bienestar psicosocial de las mujeres durante el embarazo y después de este. La prominencia de embarazos entre adolescentes, sobre todo provenientes de estratos de escasos recursos, obliga a un mayor esfuerzo por brindar educación sexual y reproductiva a los jóvenes. Esto debe incorporarse en el marco de la salud pública, por lo que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de formar personal en “salud adolescente”, incluyendo en ese proceso conocimientos y capacidades para poder asistir a jóvenes en riesgo.

En relación con este grupo, aspectos como la prevención del sida y otras enfermedades infectocontagiosas y el uso de drogas y el alcohol, deben ser tratados por personal capacitado y con servicios de fácil acceso. Se podría pensar en el establecimiento de Centros de Atención Integral para jóvenes en riesgo, que cumplan funciones de orientación, tratamiento y rehabilitación. Por lo tanto y tomando en consideración las complejidades que encierran, por ejemplo, el caso de las maras, deberán incorporarse

equipos multidisciplinarios, capaces de brindar los servicios de apoyo antes citados. Aun cuando el tema de la prostitución infantil y juvenil no fue tratado en este ensayo, en la realidad representa otro de los riesgos que enfrentan los jóvenes, por lo cual también deberían establecerse albergues que atiendan y orienten a un contingente cada vez mayor de jóvenes dedicados a la prostitución.

En el caso particular de las maras, se les debería brindar apoyo psicológico y de salud mental para facilitar su “reinserción social”. Inclusive, acciones como la remoción de tatuajes y otros elementos (*piercing*) que alimentan los procesos de estigmatización y enajenación social. Tal vez podrían operar redes locales que identifiquen factores de riesgo y faciliten la prestación de los servicios de salud dirigidos a esa población en riesgo.

Otro aspecto de vital importancia para un entorno seguro y para brindarles oportunidades a los jóvenes, es la educación. En una primera instancia, se deberá fortalecer la educación básica mediante mayor inversión en infraestructura, formación de personal docente y la readecuación curricular. Para esto último, se deben reforzar procesos de alfabetización funcional que preparen a los jóvenes para la vida adulta y para el trabajo. En ese sentido, hay que asumir la educación básica como pilar y parte de un proceso tendiente a mejorar la empleabilidad para el trabajo. Este esfuerzo deberá complementarse con acciones que faciliten una mayor permanencia de los jóvenes en el sistema educativo formal: becas, asignaciones familiares, orientación a los jóvenes y a los padres, además de la “funcionalidad” antes mencionada, forman parte de las acciones requeridas.

Para efecto de los jóvenes en riesgo y con el fin de reducir su vulnerabilidad, será fundamental desarrollar programas de prevención de violencia y delincuencia en los centros educativos. Más allá de acciones punitivo-represivas, habría que considerar, además del apoyo psicosocial que necesitan los jóvenes en riesgo, el brindarles actividades extracurriculares que sean de interés y que refuercen valores para una convivencia armoniosa. Tanto las actividades curriculares como las complementarias deben facilitarse con metodologías pedagógicas participativas, que fortalezcan la autoestima y propicien el reconocimiento social de los jóvenes.

Para jóvenes en riesgo que abandonaron el sistema educativo formal, habría que ejecutar programas de formación que les permita adquirir conocimientos y desarrollar competencias para el trabajo y la vida adulta. Los centros de atención integral para jóvenes (antes citados), la infraestructura comunal para la recreación y el establecimiento de talleres públicos para la formación para el trabajo, así como el funcionamiento de redes locales de jóvenes, son algunos esquemas que podrían reducir los

riesgos y generar condiciones para una vida digna para miles de jóvenes en Centroamérica.

El ámbito laboral también es clave para el bienestar y el futuro de los jóvenes en riesgo. El abandono temprano de la educación formal, el hecho de que el currículo educativo básico no prepara para el trabajo y no contribuye, por lo tanto, al desarrollo de competencias, y en el caso particular de los mareros, su imagen, su conducta agresiva, su bajo nivel educativo y el estereotipo que tienen, son elementos que comprometen y condicionan negativamente la empleabilidad y las oportunidades laborales de que puedan gozar.

Por ello, se requeriría buscar opciones de formación en escenarios que podrían ser ajenos a los centros educativos como los citados talleres públicos (que bien podrían desarrollarse desde la informalidad), los centros de atención integral para jóvenes, instalaciones comunales y las mismas empresas. En el caso de los mareros, habría que remover sus signos visibles que refuerzan los estereotipos que los acompañan, desarrollar programas formativos que, además de los conocimientos y las habilidades que ofrezcan, orienten a los jóvenes para una inserción laboral y social. También será necesario otorgar incentivos a los empresarios para que participen, por ejemplo, a través de esquemas de gestión compartida con las instancias públicas de capacitación vocacional, al esfuerzo formativo de los mareros. El fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, mediante programas de capacitación y crédito, podrían ser útiles para que los jóvenes gocen de mayores opciones para un trabajo que los dignifique y, por ende, contribuya no solo a sus ingresos, sino, también, a su autoestima y a la construcción de una identidad de ciudadano socialmente responsable.

Las propuestas antes citadas tendrán mayor sentido en el tanto se lleven a cabo acciones que fortalezcan a la familia. Eso pasa por la puesta en marcha de políticas y programas que ayuden a combatir la pobreza y que propicien un entorno económico, social, cultural y relacional que permita una vida familiar armoniosa. La educación familiar que posibilite la transmisión a los jóvenes de valores de solidaridad, respeto, tolerancia, amistad, paz y amor, además del acceso a servicios básicos, serán claves para mejorar las relaciones intra e interfamiliares y para prevenir la violencia doméstica. La presencia de redes de apoyo, con participación de padres de jóvenes en riesgo y el apoyo que estos puedan recibir por parte del Gobierno y otros actores sociales, podrían constituirse en espacios para el análisis y la búsqueda de soluciones para reducir los riesgos y generar mayores oportunidades de vida para dichos jóvenes.

El apoyo a la familia, a su vez, deberá acompañarse de la presencia de espacios físicos que permitan la convivencia armoniosa de las familias. Además de la importancia

de asegurarles a los jóvenes un mínimo de privacidad, estos deberán tener acceso a espacios colectivos, como canchas deportivas, zonas verdes, casas comunales, bibliotecas y centros religiosos para desarrollar actividades recreativas, sociales y artísticas, en el marco de un entorno seguro para una mejor calidad de vida.

Un último aspecto tiene relación con el papel de los medios de comunicación. Estos deberían coadyuvar en forma positiva en la formación de opinión sobre temas relacionados con los problemas de la juventud. En el tanto los medios difundan aspectos sobre jóvenes en riesgo, y en particular, a los mareros, de manera sensacionalista, mostrando en forma cruda el fenómeno de la violencia y no se aborden aspectos que contribuyan a la rehabilitación y reinserción social de los jóvenes, será muy difícil rescatar a miles de ellos que conviven en un entorno inseguro y violento. Los medios de comunicación también pueden ayudar al fomentar valores cívicos y morales, que incidan en la integración familiar y la vida en comunidad.

Además de los medios de comunicación, será necesario llevar a cabo acciones para fortalecer la institucionalidad encargada de la seguridad pública. Este tema escapa de los objetivos del ensayo, pero es necesario resaltar la importancia de articular políticas de seguridad con otras orientadas al desarrollo, fortalecer la capacidad de gestión de los cuerpos policiales y prepararlos para apoyar esfuerzos preventivos y de rehabilitación y no centrar su accionar en tan solo esquemas punitivo-represivos, que operan sobre las personas y no sobre las situaciones que inciden en el “delito” y, por ende, la violencia. Adicionalmente, será necesario mejorar las estadísticas sobre violencia y criminalidad, así como desarrollar investigaciones que rescaten la complejidad de fenómenos que responden por la inseguridad y vulnerabilidad que enfrentan grandes sectores en los diferentes países de la Región. Esas pesquisas deberían ser utilizadas, como mínimo, para orientar mejor la acción policial y contribuir así al debate sobre la violencia que afrontan las sociedades centroamericanas.

Las propuestas vertidas en esta sección son tan solo una muestra del tipo de acciones que podrían desarrollarse para brindar a la población en general, pero en particular, a grupos vulnerables, como los jóvenes que participan en pandillas juveniles, un entorno seguro donde desenvolverse y ejercer sus derechos y responsabilidades sociales. La persistencia de importantes rezagos económicos y sociales que contribuyen a la inseguridad en que vive la mayoría de las personas en el istmo, no permite la inacción de los gobiernos ni de las sociedades en cuestión; por lo tanto, es de vital importancia tomar medidas que corrijan el rumbo de los procesos de desarrollo de la Región e implementar, en el proceso, políticas y programas que les permitan a las personas desenvolverse en un entorno seguro y gozar de medios de vida sostenibles que aseguren una calidad de vida digna.

## Bibliografía

- Abaunza, Humberto y Andino, Ricardo (2003). *La sociedad contra los jóvenes: Las Pandillas de Estelí*. Managua, Nicaragua.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2003). *Receptores de Remesas en Centroamérica*. Fondo Multilateral del Banco Interamericano de Desarrollo y el Pew Hispanic Center. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Banco Mundial (2003). *World Bank Development Indicators Database*, Banco Mundial.
- Casa Alianza Nicaragua (2004). *Las Pandillas Expresión de la Violencia en Nicaragua*. Managua, Nicaragua.  
(<http://www.casa-alianza.org/ES/about/offices/nicaragua/maras.phtml>)
- CEPAL (2000). *Panorama Social de América Latina 1999-2000*. Publicación de Naciones Unidas. Santiago, Chile.
- CEPAL (2002). *Panorama Social de América Latina 2001-2002*. Santiago, Chile: Naciones Unidas.
- CEPAL (2003). *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe*. Publicación de Naciones Unidas. Santiago, Chile.
- CEPAL (2003). *Estado de la Población Mundial, 2003*, CEPAL, Chile.
- CEPAL (2004). *Panorama Social de América Latina 2004*. Santiago, Chile: Naciones Unidas.
- CEPAL, Base de Datos e Indicadores Sociales, [www.eclac.cl/badeinso](http://www.eclac.cl/badeinso)
- Comisión Sobre Seguridad Humana (2003) *Human Security Now*, New York.
- Consejo Monetario Centroamericano (2005). *Informe Económico Regional*, [www.secmca.org](http://www.secmca.org)
- Cruz, José Miguel y Nelson Portillo Peña (1998). *Solidaridad y violencia en las pandillas del gran San Salvador: Más allá de la vida loca*. San Salvador: UCA.

El Nuevo Herald (2003). *Las remesas, transfusión vital para Centroamérica*. (periódico) (<http://www.miami.com/mld/elnuevo/6788286.htm>)

FESPAD (2005). *Informe anual sobre justicia penal juvenil El Salvador 2004*. FESPAD, San Salvador.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2002). *Los Jóvenes y el VIH/SIDA: una Oportunidad en un Momento Crucial*. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y OMS.

Fondo de Población de las Naciones Unidas (2003). *Estado de la población mundial 2003 valorizar a 1.000 millones de adolescentes: inversiones en su salud y sus derechos*. Nueva York, Estados Unidos de América.

Fondo Monetario Internacional, [www.imf.org/external/countryinfo](http://www.imf.org/external/countryinfo)

Gómez Buendía, Hernando (1998). *Educación, la Agenda del Siglo XXI: Hacia un Desarrollo Humano*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. TM Editores, Colombia.

Instituto Universitario de Opinión Pública -IUDOP- (2001). *Maras y Pandillas en Centroamérica*. Vol. I. ERIC, IDESO-UCA, IDIES - URL. Managua: UCA.

Instituto Universitario de Opinión Pública -IUDOP- (2004). *Maras y Pandillas en Centroamérica*. Vol. II. ERIC, IDESO-UCA, IDIES - URL. Managua: UCA.

*La Prensa Gráfica*, El Salvador, varios reportes

*La Prensa* (2000). *Vivienda y empleo*. Honduras (periódico). (<http://www.laprensahn.com/opinarc/0001/o08001.htm>)

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (2004). *Política Salvadoreña de Vivienda*. San Salvador, El Salvador.

Nowalski, Jorge (2002). *Asimetrías económicas, laborales y sociales en Centroamérica: Desafíos y oportunidades*. San José: FLACSO.

Nowalski, Jorge (2003). *Asimetrías Económicas, Sociales y Políticas en Centroamérica: Hacia una Calidad de Vida Digna*. Costa Rica. 2003.

Nowalski, Jorge y Doris Osterlof (2004). *CAFTA/TLC: potencial competitivo de los sectores productivos de Centroamérica*. Centro Internacional para el Desarrollo Humano. San José: Lara Segura y Asociados, S.A. Editores.

Nowalski, Jorge, Keynor Ruiz, Luis Diego Coto y Mauricio Dierckxsens (2003). *La inversión extranjera directa y las empresas multinacionales: efectos sobre la economía local, el empleo y la formación*. OIT, Ginebra

OIT (2003). Base de Indicadores Trabajo Decente. (<http://www.oit.or.cr/estad/>)

OIT (2003). *Panorama Laboral 2003 América Latina y el Caribe*. Oficina Regional de la OIT para las Américas. Lima, Perú.

OMS (2001). *Desigualdades en el acceso, uso y gasto con el agua potable en América Latina y el Caribe. Serie de Informes Técnicos N.º 8: Nicaragua*. Programa de Políticas Públicas y Salud de la División de Salud y Desarrollo Humano de la Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., Estados Unidos de América.

Organización Iberoamericana de Juventud (2000). *Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina*. Madrid, España.

Organización Internacional para las Migraciones (2001). *Estudio Binacional: Situación de la Migración entre Nicaragua y Costa Rica*. Ginebra, Suiza.

PNUD (2003). *Informe de Desarrollo Humano 2003: Los objetivos de desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nueva York, EE. UU.

PNUD (2003). *Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá*. Proyecto Estado de la Nación. San José, Costa Rica.

PNUD (2004). *Human Development Report, 2003*. New York.

PNUD Guatemala (2001). *Financiamiento del Desarrollo Humano Informe Nacional de Desarrollo Humano 2001*, Guatemala.

Santacruz G., M. y A. Concha-Eastman (2001). *Barrio Adentro: La solidaridad violenta de las pandillas*. Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), UCA; OPS; y Homies Unidos. San Salvador, El Salvador.

- Smutt, Marcela (1998). *El fenómeno de las pandillas en El Salvador. Violencia en una sociedad en transición*. San Salvador: PNUD, pp. 146-161.
- Trejos, Juan Diego (2002). *El trabajo decente y el sector informal en los países del istmo centroamericano*. OIT.
- Umanzor, Serapio y Carlos Girón (2002). “150 mil pandilleros han sembrado el terror en Centroamérica.” *La Prensa*, Honduras.
- UNESCO (2004). *Global Education Digest 2004: Comparing Education Statistics Across the World*. UNESCO Institute for Statistics. Montreal, Canada.
- UNICEF (2002). *Los Jóvenes y el VIH/SIDA: una oportunidad en un momento crucial*, UNICEF, México.
- UNODC (2004). “8th United Nations Survey on crime trends and the operation of criminal justice systems [2001-2002].” United Nations. New York
- Villarroel, Natalie (2004). “Ex pandilleros bajo amenaza: Sentencia de Muerte”. *Revista Vértice*, edición del 5 al 12 de diciembre, El Salvador.